

La estrategia económica

Contradicciones en el programa del XXIX Congreso

El PSOE, entre el gradualismo y la socialdemocracia

La relativa proximidad de las elecciones generales ha estimulado el natural interés por conocer el programa del partido que, para muchos, se configura como un firme aspirante a gobernar después de aquéllas. Su programa económico es el pronunciamiento que va a ser leído con más minuciosidad. Por las informaciones obtenidas de la Prensa se trata de un programa con el que podría gobernar un partido que no se llamara socialista obrero. Quizá sea así, pero su correcta lectura hay que plantearla en el contexto de las posibles estrategias económicas socialistas y, en concreto, de la del PSOE. En este artículo, Rafael Ramos Martínez, miembro de la Fundación para el Progreso de la Democracia, analiza primero la estrategia económica socialista en Europa y, a renglón seguido, las aspiraciones y los principios en que se apoya el último programa económico del PSOE aprobado en el XXIX Congreso el pasado mes de octubre.

Lippincott, en un célebre prólogo a ensayos de O. Lange y F. Taylor, explicó que los socialistas, antes de acceder al Poder, se mostraban perezosos para estudiar y tratar teóricamente el funcionamiento de una economía socialista. Les reprochaba, en paralelo, la excesiva inversión de tiempo dedicado a las cuestiones políticas. Pues bien, aunque esta advertencia fue formulada por los años 30, da pie todavía para abrir el análisis a la estrategia económica de los socialistas.

Desde entonces a la fecha los socialistas, incluidos los españoles, han avanzado poco en la formulación de una propuesta teórica que evite el derrape hacia la concentración de poder y la privación de libertades de las fórmulas experimentadas en el Oriente europeo y la desviación hacia las formas socialdemocráticas, consumidas en su propia dinámica de intervencionismo, burocracia y elefantiasis administrativa. Entre ambos puntos, que son los extremos de las fórmulas prácticas, se han situado algunas propuestas teóricas que definen las alternativas más genuinamente socialistas, por su carga utópica y su ímpetu renovador.

El eje de estas propuestas teóricas es el llamado socialismo democrático de mercado, sistema en el que funciona con libertad el mercado de consumo y de trabajo y en el que es pública la oferta de bienes y servicios. Según sus promotores, esta fórmula presenta varias ventajas: opera con el modelo teórico de formación de precios del sistema de libre economía, es decir, con un procedimiento objetivo para hacer posible el cálculo económico; permitiría eludir las crisis de las economías libres a través de la planificación; la igualación de rentas se apoyaría en salarios objetivos.

Este sistema tenía, según O. Lange, un problema: el gran poder de los planificadores y la burocratización. Para obviarlo, los pensadores definieron la autogestión con el fin de paliar, a través de la mayor circulación del poder, los efectos de la estatización, a los que tan renuentes son los socialistas democráticos. Las dificultades de poner a funcionar este sistema han llevado a los socialistas a degradarlo, siguiendo varios caminos, para hacerlo realizable. El carácter democrático del plan se reduciría a acuerdos entre corporaciones y comités; se admitiría una cuota de oferta por el sector privado; se aceptarían diferencias en los niveles de igualdad; se limitaría el principio de circulación de poder: no se trataría tanto de lograr la autogestión como de proponer una forma de participación corporativa.

Aceptada como mal menor esta hipótesis degradada, entre el plan central y la socialdemocracia convencional, no desaparecen todos los problemas. Quedarían dos importantes. Veamos el primero. ¿Por dónde em-

pezar? La respuesta a esta cuestión la dio también O. Lange: un programa socialista hay que realizarlo de una vez. No se puede hacer por etapas, pues el mero anuncio de la fase por la que se comenzará —nacionalizaciones, por ejemplo— podía implicar la descomposición y hundimiento del sistema capitalista en vigor, con perjuicio para el bienestar y para la nueva clase política. El segundo problema es el riesgo de superar el capitalismo sin realizar el socialismo, sino un régimen corporativo; es decir, Estado fuerte y equilibrios resultantes de múltiples acuerdos entre organismos de representación corporativa.

R. Selúcky ha señalado que el concepto de la medida en la que se realiza el socialismo es puramente ideológico y, por ello, pierde operatividad a la hora de construir el socialismo en una sociedad capitalista. Pero el resultado de la degradación del socialismo democrático de mercado es, según este crítico del socialismo burocrático, «una superación socialista del capitalismo típicamente negativa, estadística y meramente formal». Ahí está el ejemplo del presidente francés que, después de ofrecer aspiraciones sublimes, se limita a reformas de fecha que en nada alteran las relaciones de producción, pero que no crean otras relaciones de poder no menos distorsionantes.

La estrategia económica defendida desde hace años por los socialistas españoles se



Felipe González



François Mitterrand

sitúa en esta vía no experimentada, salvo quizá en el caso de Yugoslavia. Es decir, no se trata ni de una solución oriental ni de la alternativa socialdemocrática. Los socialistas españoles, en efecto, no renuncian a su programa máximo: las discrepancias actuales, ha dicho J. Solana, son más de ritmo que de objetivos. Pero hay un horizonte a veinticinco años en el que el programa del XXIX Congreso es un primer paso que, además, no da la espalda a la realidad actual. En ese Congreso se han esquivado los problemas de estrategia económica para abrir con facilidad un paréntesis de confianza para unos y de esperanza para otros en la gestión socialista. Esto está muy bien. Y da la razón sobre la pereza económica a Lippincott, también en este caso, por el exceso de preocupación por las cuestiones políticas.

Pero el compromiso de hacer un programa con el que ganar y gobernar no debe ocultar a los electores que se trata de un paso inicial inscrito en una estrategia no exenta de dificultades que, en último término, supone una profunda modificación del sistema actual sobre la que el pronunciamiento del electorado requiere una adecuada información previa.

EL PROGRAMA ECONOMICO DEL XXIX CONGRESO

El programa económico aprobado por este XXIX Congreso pretende básicamente dos cosas: dar los primeros pasos en el camino de la igualdad y combatir el paro. El objetivo de la igualdad, que los socialistas definen sólo «en abstracto», se intenta lograr a través de tres caminos: la igualación de rentas, el aumento de las prestaciones del sector público y la modificación de las relaciones de producción. Pero para los socialistas la igualdad no es la única nota de una sociedad socialista: hay que añadir la democratización en profundidad a la que se llegaría a través de un sistema institucionalizado de representación de los intereses, no sólo políticos, también de los económicos y de los que llamaremos vitales. Todo esto hay que considerarlo conjuntamente.

La igualdad sería, pues, el resultado del control público y político de la economía y de la profunda democratización organizada para que el poder circulase a través de una tupida red de órganos de representación entre los que el Parlamento ocuparía una posición en la pirámide de «mini parlamentos» de barrio, de fábrica, de Ministerio, etcétera. Para lograr ese control no son necesarias muchas nacionalizaciones si se obtiene una situación de dominio público real sumado a cualquier fórmula de co-gestión-autogestión. Bastaría esto para modificar en una primera etapa lo que los socialistas llaman relaciones de producción. Con ello darían lugar a unas nuevas relaciones de poder, de las que ésas son una parte, derivadas de la mayor soberanía económica de la clase política; este problema que desbarata el fin de las nacionalizaciones...

socialista en Europa



Helmut Schmidt



Bruno Kreisky



Andreas Papandreu



Olof Palme



Mario Soares



James Callaghan

no está resuelto, lo que ya es grave. Pero si-gamos

LA EFICACIA DEL SECTOR PÚBLICO

Creer los socialistas que la igualación de las rentas no se traduciría en menores estímulos para prosperar. Bastaría leer precisamente a un socialista, A. Dubček, para empezar a dudar de las ventajas colectivas de esa fórmula. Opinán, por otra parte, que el mayor peso económico del sector público, además de que hace posible la igualdad, no reduce la creación de riqueza ni supone pérdida de la utilidad del mercado para la asignación racional de recursos. Como contrapartida adicional entienden que se eliminarían las crisis y que se lograría el pleno empleo. Naturalmente que para que esto marchara bien tiene que funcionar con eficacia la Administración del Estado.

Esta fe socialista en la eficacia económica del sector público se basa en la creencia de que éste puede conocer y utilizar toda la información económica y no económica, dispersa entre los agentes en forma de conocimientos, de experiencia, pericia, costumbres e intuiciones. Pero eso no es así. Los propios agentes económicos privados no son conscientes de la información que poseen y ponen a funcionar en cada decisión. En cuanto a la capacidad de la Administración, no se puede incurrir en el maniqueísmo de pensar que ésta hace bien incluso aquello para lo que existen los empresarios. La Administración es más capaz que los empresarios para hacer ciertas cosas, pero menos para otras.

Los posibles problemas de la ampliación de la cuota económica del sector público no se compensaría por la existencia de un mercado libre para ciertos productos. Los socialistas han aceptado el mercado, e incluso lo ensalzan, porque han llegado a convencerse de su capacidad para asignar los recursos con más eficiencia que el plan. Pero en su posición hay dos puntos débiles. El mercado es como una baraja de naipes. La trampa de quitar palos la invalida para jugar. Con un Es-

tado que controla un amplio porcentaje de actividad económica, con un plan económico, con igualación de rentas, el mercado libre para algunas actividades sería una caricatura desafortunada. El otro punto débil es pensar que las ventajas del mercado se limitan a la correcta asignación de recursos. Hay otra tan importante que se pierde en la concepción socialista: la capacidad creadora, motriz, catalizadora, innovadora, de la competencia, tan recortada en la España de hoy por tanta traba burocrática y por un marco institucional intervencionista.

PARO Y PARTICIPACION

Nos quedan dos puntos del programa económico socialista que conciernen al ámbito del trabajo: el paro y la participación de los

trabajadores en las decisiones. Sobre este último basta decir que, en un mundo complejo, la capacidad de participar en decisiones se basa en la disposición de información y en la capacidad de atención. Nada que objetar a la participación democrática, salvo hacer notar que en el proceso participativo, como se verifica en Yugoslavia, unos se alzarían con el santo y otros con la limosna. Al final, los más capaces serían los que impusieran los criterios ante la participación "pasiva" de los demás.

En cuanto al paro, decir que a estas alturas los economistas sabemos que la solución está, con empresa pública y privada, en la moderación de los salarios reales y en la modificación del marco institucional. El sector público no crea más empleo que el privado y casi diría que crea menos que el que destruye con su atosigamiento fiscal y reglamentario. Si se predica la moderación de los costes laborales, pero la porción de renta que no se otorga vía salarios se otorga vía mayores prestaciones públicas de las llamadas sociales, que supongan fuertes y rápidos aumentos de presión fiscal, se dificultaría la finalidad del solidario propósito de aceptar salarios más bajos. Al final se pagarían por los más capaces los impuestos que, en otro caso, se hubieran destinado a pagar salarios, y no cabría pensar en la pretendida recuperación de los márgenes de explotación, sino en la recuperación de las precarias cuentas del sector público. En resumen, para acabar con el paro, moderación salarial, sí, pero no a cambio de mayor presión fiscal, porque puestos a ser keynesianos, y yo no lo soy, no hay razón para pensar que el tirón del consumo privado sobre la inversión sería menos fuerte vía salarios más altos que vía gastos públicos crecientes, antes lo contrario. Pero en este segundo caso si sería menor la libertad para elegir cómo gastar el producto del trabajo, lo cual es poco compatible con la libertad, predicada por los socialistas para participar en decidir cómo se realiza aquél.—Rafael MARTOS.